

Imprimir

En una coyuntura de extrema gravedad por la situación social de pauperización resultado de la pandemia, la dinámica del movimiento popular corre el riesgo de resultar inocua por falta de un proceso político incidente. La táctica del gobierno es la correcta para el CD: agotarlo como al paro anterior con un tinglado de diálogos nacionales en los cuales no están los que son ni son los que están; nuevamente reunido con empresarios, gremios, grupos políticos de derecha, obispos católicos, y evangélicos. El cálculo del gobierno es nuevamente que los movimientos populares se agotan por desgaste y frustración.

Por esta y otras razones las perspectivas no son las mejores. Las complicaciones emergen en tres aspectos: Primero la ausencia de un proceso político, de un grupo político capaz de canalizar el descontento popular en propuestas con incidencia política. En esta dirección el contraste con Chile es ilustrativo. Como resultado del paro allá, canalizando el descontento popular, y apoyándose en este, los grupos políticos de izquierda impusieron una constituyente que Piñera no tuvo más remedio que aceptar, e incluso trató de capitalizar (después de que la policía allá se había comportado en forma tan criminal como la colombiana). ¿Dónde están los grupos de oposición acá, más allá de comentarios acertados contra la violencia, pero inocuos en avanzar en esa dirección? En esta forma paradójicamente contribuyen al éxito de la estrategia del gobierno de desgastar y agotar el movimiento popular.

El segundo aspecto es la violencia policial y paramilitar desatada sin control alguno. Uribe trajo al ejército a las calles y los paramilitares a las ciudades. La gravedad de esto no radica solamente en los crímenes con los civiles y el vandalismo de los infiltrados sino en que esto reduce el espacio para ese proceso político, precisamente lo que busca el CD. La situación en Cali destaca la total incompetencia de Duque carente del liderazgo político que demanda su extrema gravedad, como en general la de la crisis de la cual es el responsable principal. La información es confusa, pero parece que excesos de la Minga indígena (a la cual debemos la protección de grupos de manifestantes frente a los paramilitares) han irritado a sectores de la población. Como destaca también la situación dramática de la policía nacional criminalizada en muchos sectores en las alianzas con paramilitares que infestaron la seguridad democrática (el despojo y desplazamiento con sentido social) y en un ESMAD

desatado a niveles de violencia represiva y abusos criminales sin precedentes, en un país con una muy nutrida historia de represión.

El tercer aspecto proviene del lado del paro y es resultado de la ausencia de líderes políticos capaces de canalizar el movimiento popular. Por una parte, convendría que el comité del paro tomara en consideración la coyuntura económica del país. El gobierno se blindó frente a la coyuntura social con esfuerzos que por valiosos no llegan a suficientes frente al horror de la pauperización que derrumbó por debajo de la línea de pobreza a masas enormes de la población. Pero la reforma tributaria no es solo necesaria para poder atender, aunque sea parcialmente, esas necesidades, lo es porque la explosión del déficit y la incertidumbre sobre el recaudo para cubrirlo puede llegar a encarecer el crédito para el país y limitar la inversión tanto doméstica como extranjera. Más incertidumbre es lo peor que le puede pasar a esta maltrecha economía para lograr recuperar la senda del crecimiento, pues erosiona a esta su mecanismo fundamental. La nueva propuesta va en la dirección correcta corrigiendo el sesgo anti clase media y pro ricos/empresarios de las reformas de Carrasquilla y avanzando en forma sin precedentes hacia un sistema más progresivo. Es cierto que una figura tan odiosa por prepotente e insensible, además con antecedentes como los bonos de agua y los activos en Panamá, agravó la torpeza del gobierno en la gestión de la reforma. Pero una postura ciega a la necesidad de aumentar el recaudo es irresponsable e inconducente: una crisis cambiaria y financiera por deterioro de las expectativas sobre la economía y su capacidad de pagar sería absolutamente catastrófica para las condiciones de vida de los más pobres.

Por otra parte, las tácticas extremas. Claro que es difícil controlar jóvenes exaltados que descargan su frustración destructivamente (peor aún vándalos o bien criminales o bien infiltrados), pero es importante incluso para la imagen del paro. En esta dirección, impedir la circulación de ciudadanos y bienes es un error táctico fundamental. El paro debe desligarse del paro camionero y de los bloqueos que están desabasteciendo a la población de las ciudades. Nada genera más resistencia que el desabastecimiento, eso (con la ayuda de la Cia Reagan y Juan Pablo II) tumbó al popular gobierno sandinista en Nicaragua (claro que acá tenemos expertos en relaciones públicas como la FARC que lograron amasarle a Uribe un capital político inagotable con sus abusos a la población).

Por todas estas razones y complicaciones es muy probable que el movimiento popular no se traduzca en un proceso y unos mecanismos que pudieran conducir a que el sistema político colombiano evolucione hacia una democracia. Otra coyuntura, de estas que no se presentan con frecuencia, sin salida; a menos de que se tradujera en un movimiento electoral masivo, que solo una oposición unida puede generar, de defensa de la incipiente democracia colombiana, asediada por fascismo uribista, que le frustrara continuar en el poder.

Ricardo Chica

Foto tomada de: Semana.com